

CONDICIONAMIENTOS SOCIO-POLITICOS DEL PROCESO ELECTORAL

Segundo Montes

Las elecciones del 25 de marzo de 1984, en El Salvador, se realizan en un contexto socio-político determinado, que condiciona todo el proceso y los resultados. La libertad, la democracia, la expresión de la soberanía popular no pueden quedarse en conceptos abstractos; son concreciones históricas de una realidad social. Existen condicionantes que coartan —o posibilitan— el ejercicio auténtico de esa libertad, democracia y soberanía, en la que el pueblo expresa su voluntad y elige a sus mandatarios.

Vamos a tratar de analizar cuatro condicionantes que, a nuestro juicio, imprimieron al proceso eleccionario unas características tales que le privaban de gran parte de su valor como expresión democrática.



1. La crisis democrática y la insatisfacción de las mayorías

El significado de un proceso electoral bajo un sistema democrático representativo, en una sociedad en la cual la organización de la vida económica y social descansa sobre las bases de un sistema de producción de libre iniciativa capitalista, es tal que el sufragio universal de los ciudadanos partícipes de ese sistema se muestra como su ideal político. La libre concurrencia de las ideas políticas y, más aún, la competencia entre las distintas facciones resulta ser una proyección en lo político de la concurrencia y competencia de los individuos en las fuerzas del mercado.

Como fundamento para la realización espontánea del sistema de sufragio se requiere que las formas de producción e intercambio del sistema económico permitan la participación y satisfacción, para las mayorías poblacionales, de lo que constituyen sus bienes y necesidades básicas para la reproducción de la vida humana. La aceptación de las formas de sufragio universal como mecanismo de participación y adjudicación del poder político para las mayorías ciudadanas debe partir de la satisfacción de sus necesidades fundamentales de existencia. Por el contrario, el impulso de un proceso electoral, en una necesidad que no permite la satisfacción de esas necesidades para las mayorías sociales, adolecerá en principio de contradicciones que entorpecerán su aceptación y participación espontánea, por la percepción inveterada de que no se va a solucionar por las elecciones su problema fundamental en tales condiciones, el impulso del sufragio por el aparato gubernativo estará plagado de vicios en el consentimiento público, como la intimidación y la manipulación.

Los datos de la realidad socio-económica del país muestran que la insatisfacción de las necesidades fundamentales es un problema que agobia la existencia de las mayorías desposeídas, llevando esto a una frustración y escepticismo hacia mecanismos políticos que reiteradamente no han resuelto los problemas básicos de las mayorías. Acudieron, sí, a las urnas, por muy distintas razones o motivaciones; pero una vez cumplido ese

“deber”, el resultado mismo de las elecciones les interesa y procura mucho menos que su angustioso presente.

El deterioro de la economía del país no es simplemente cuantitativo, expresado sólo en las disminuciones de unas variables (consumo, poder de compra, salario) condicionadas por el fenómeno de la guerra, sino que es también cualitativo, o sea, originado en los criterios para la distribución de las riquezas sociales. Estos criterios han tenido por norma olvidar de manera sistemática la retribución justa del esfuerzo de trabajo de las mayorías sociales del país. Las mayorías de los trabajadores del campo y de la ciudad no han participado de manera fundamental de los beneficios del sistema económico sino, más bien, han participado de sus costos y pérdidas. Los salarios se han mantenido en una tendencia estática mientras se ha observado una tendencia al alza de los precios en los bienes de consumo. Si de 1957 a 1969 el incremento de precios al consumidor fue tan sólo del 9 por ciento, en el periodo 1972-1977 el índice de precios experimentó una alza del 77 por ciento. Pero la crisis económica para las mayorías del país se agudiza a partir de 1978, a grado tal que para 1979 la canasta familiar (tipo urbano), que tenía un valor de 486.70 colones, pasó a costar 770.70 colones en mayo de 1983; y de seguir así la inflación, se espera que para diciembre de 1984 dicha canasta alcance un valor de 861.94 colones (cfr. *Boletín de Ciencias Económicas y Sociales*, 1983, 447). Como se desprende de las cifras citadas, el costo económico para la reproducción de la vida del hombre salvadoreño se ha venido elevando, y no así los salarios, los cuales han permanecido casi estáticos y constituyen la única fuente de ingresos para las mayorías sociales del país. Según datos oficiales, para 1983 un 96 por ciento de la población económicamente activa ocupada no tendría ingreso suficiente para adquirir la canasta mínima (ibidem, 448).

Pero además de la reducción de los ingresos reales de las mayorías sociales, el país ha venido afrontando un creciente problema de desempleo. Según cálculos de PREALC, se estima que la tasa de desempleo para el año de 1980 era de 36.9 por ciento y que dicha tasa ha tendido a incrementarse para los años posteriores, dadas las reducciones reales del producto territorial bruto.

Los problemas básicos que aquejan a las mayorías sociales de El Salvador no han podido resolverse, más aún, se han agudizado, muchas

veces por acciones u omisiones de la política económica gubernamental. No ha podido controlarse el fenómeno inflacionario, ni se ha solucionado el problema del desempleo, pero sí se ha logrado un control efectivo en la congelación de los salarios por la puesta en vigencia del decreto 544 (“Ley temporal de estabilización económica”), cuyo efecto más importante ha sido la congelación de salarios desde 1980, pero que realmente no ha podido estabilizar los precios galopantes de los bienes de consumo, permitiendo así un crecimiento sostenido de la inflación.

Adicionalmente a esos graves problemas, las mayorías ciudadanas y rurales han tenido que afrontar reiteradamente una escasez y carestía de bienes alimenticios, originada por los problemas de la guerra, la disminución de las áreas sembradas, el decrecimiento de las cosechas por diversas causas, la sustracción y acaparamiento de los especuladores, e incluso el cierre de fronteras con países vecinos que abastecen bienes de consumo, en parte debido a la escasez de divisas o de liquidez de moneda.

En esta situación de profundización de la crisis económica, los esfuerzos gubernamentales por la conservación formal de las reformas sociales no han producido mayor impacto de solución, más que como una retórica de buenas intenciones. El poco éxito —por no decir fracaso— de la reforma agraria ya es un tópico en cualquier interpretación o tendencia; la nacionalización de la banca no ha puesto recursos a disposición de los pequeños productores ni ha modificado sus políticas de crédito; la nacionalización de una parte del comercio exterior tampoco ha impedido completamente la fuga de divisas, no ha logrado mayores cuotas ni mejores precios de exportación y es posible que haya derivado fondos considerables para los costos de la guerra.

En este contexto se han suscitado, en los meses previos a las elecciones, una serie de paros laborales, como efecto acumulado de la crisis y del vencimiento del decreto 544, los cuales han abierto un espacio al resurgimiento de luchas reivindicativas en busca de incrementar los salarios. Estas han sido interpretadas por las fuerzas empresariales y de derecha como una consecuencia del “pacto social” suscrito entre la UPD y el PDC, o como efecto de la infiltración comunista y “subversiva” en el seno de las organizaciones sindicales y gremiales (*Proceso*, 139, 3). La mayor parte de estas luchas ha sido protagonizada por emple-



ados del sector público (Banco Central de Reserva, Banco Salvadoreño, Banco de Crédito Popular, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Instituto Regular de Abastecimientos, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Salvadoreño de Turismo), instituciones en las que los respectivos sindicatos han percibido el momento político que propicia el evento electoral, como una apertura para sus reivindicaciones económicas por mucho tiempo acalladas por el clima de represión y de terror vivido en el país; el hecho de que las directivas y patronales estén controladas por miembros o simpatizantes de ARENA (que controla todo el sector económico) no es una casualidad, pero ha dado excusa para que lo interpreten en la forma antes mencionada.

Se asiste, pues, a un evento electoral en el cual las mayorías siguen afrontando graves problemas de existencia derivados de la insatisfacción de sus necesidades económicas fundamentales y perciben dicho proceso electoral como un evento político más, que de forma tal vez

desesperanzadora no ofrece solución a sus problemas vitales, pero que, a la vez, permite resquicios de espacio político para que ciertas asociaciones gremiales expresen públicamente sus reivindicaciones. La aceptación espontánea como forma de consenso favorable al sufragio está sobre el tapete de la duda para la opinión pública salvadoreña.

2. La situación de las libertades y derechos ciudadanos

La puesta en marcha del evento electoral, como mecanismo para la disputa y la distribución del poder político requiere, en cualquier país donde se implemente, una serie de condiciones necesarias para asegurar la libre concurrencia de ideas y posturas políticas en la pugna por el poder. La más elemental teoría política señala que el sufragio universal debe estar rodeado de un marco jurídico-político que permita el libre ejercicio de los derechos ciudadanos; es condición y complemento para la realización política del derecho del sufragio la garantía de los derechos individuales de libertad de expresión, la libertad de movimiento, la inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio. Sin el respeto a tales principios no es realmente posible el cumplimiento de los fines que la institución del sufragio universal en los regímenes democráticos.

El proceso electoral de marzo de 1984 no parece haber considerado estas máximas elementales del juego democrático. Así se ha montado un evento electoral a pesar de las graves fallas en el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en El Salvador, impulsándolo en medio de una situación de violencia y de guerra civil. Esta opinión está respaldada no sólo por la evidencia de los hechos, sino también por juicios de gran credibilidad internacional, como los expresados en el proyecto de resolución XVI de la 38ª. Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales en El Salvador, el cual dice en uno de sus puntos: "tomando nota con profunda preocupación del informe provisional del Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos, en el que se confirma la continuación de un clima de violencia e inseguridad en El Salvador, caracterizada por choques armados, acciones de sabotaje económico y graves y masivas violaciones de los Derechos Humanos, así como la incapacidad de las autoridades salvadoreñas para evitar estas constantes violaciones de los Derechos Humanos en ese país" y continúa la re-

solución, recomendando: "que se lleven a cabo las reformas necesarias para que se dé solución a los problemas económicos y sociales que están en el origen del conflicto interno en El Salvador, a fin de permitir el ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos en ese país, y reafirma el derecho del pueblo salvadoreño a determinar libremente su futuro político, económico y social, sin injerencias del exterior y en una atmósfera libre de intimidación y terror". Esta resolución fue aprobada por 84 votos a favor, 14 en contra, y 45 abstenciones (*ECA*, 1984, 423-424, 105-6).

No es necesario insistir en demasía sobre el franco deterioro de la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales en El Salvador; basta señalar que a partir de marzo de 1980 el país ha vivido bajo un permanente estado de sitio que, por medio de diferentes decretos gubernamentales o de la asamblea, rutinariamente ha ido suspendiendo mes a mes las garantías fundamentales que el Estado debe al ciudadano (libertad de expresión, de reunión, etc.). Pero además de esas suspensiones legales de las garantías individuales, la ciudadanía ha vivido en un clima de zozobra, de represión e intimidación, derivado tanto de las acciones de guerra que ejecutan las fuerzas regulares del ejército gubernamental y del FMLN, como de las acciones de los grupos paramilitares de derecha (escuadrones de la muerte) que desarrollan sistemáticamente una campaña de terror (*ECA*, 1983, 421-422, 1040-41; 1984, 423-424, 107-112).

Las elecciones en El Salvador, lejos de tener un ambiente político favorable y de ser un mecanismo institucional para resolver los problemas de la disputa y acceso al poder de Estado, han sido en 1984 un problema mal planteado. En primer lugar, por no existir las condiciones propicias para su realización y, en segundo lugar, porque no hacen participe en la disputa por el acceso al poder político a una de las fuerzas más importantes en la realidad social del país, el FDR-FMLN, que en su oposición a la Fuerza Armada protagoniza el continuo recrudecimiento de la guerra. El privar de hecho al pueblo de la opción por un proyecto ideológico-político que muestra tener tanta fuerza, difícilmente se puede compaginar con el concepto de democracia; como tampoco se puede explicar fácilmente la exclusión factual de unas 800.000 personas (exiliados, desplazados, etc.), que representan el 33 por ciento de posibles votantes, y que a pesar de ser

salvadoreños no pueden ejercer su voluntad soberana.

En consecuencia, el hecho fundamental de la vida política y social del país, la guerra civil, continúa siendo el problema esencial y por eso es sumamente impropio el plantear un evento electoral en esas condiciones. Las acciones militares de la guerrilla, según radio Venceremos, fueron capaces de impedir en la primera vuelta la realización de las votaciones en 91 (40%) municipios de la república —número considerablemente menor, a juicio del CCE, que reconoció sólo 50 (19.16%) en la primera vuelta y 39 (15%) en la segunda, si bien la proporción respecto a la población es considerablemente menor— a pesar de no haber intentado impedirla como en 1982. Si se añade el sabotaje a la energía eléctrica, que de forma indirecta afectó la realización del evento, así como otra serie de irregularidades no imputables al FMLN que obligaron a anular 760 urnas (11%) en la primera vuelta y al extravío de otras 800, cuya búsqueda solicitó al CCE a la fiscalía (según declaraciones aparecidas en los rotativos locales), los reclamos de anomalías y fraudes, etc., los hechos mostraron la imposibilidad de unas elecciones tímidamente aceptables en el país, en las que más de la mitad de los votos potenciales no fueron emitidos o fueron anulados.

3. Las elecciones como cerradura al diálogo y a la negociación

Las elecciones, como proceso político implementado por la administración Reagan y el gobierno de El Salvador, están asociadas al mantenimiento de la situación de guerra como forma de contención y expectativa de triunfo sobre las fuerzas insurgentes del FMLN. En tal sentido, el proceso electoral fue presentado como una puerta que se abría a los insurgentes para que participaran en la contienda por un espacio político demarcado por los parámetros gubernamentales y por los condicionamientos económicos y sociales. Al negarse el FDR-FMLN a participar en el juego, se proclamó que la puerta del diálogo había sido cerrada por la misma izquierda, al tiempo que se desconocía o se despreciaba la última propuesta de diálogo y negociación formulada por el FDR-FMLN.

No obstante, el proceso electoral fue impulsado y la campaña proselitista de los distintos partidos fue concentrando la atención de la opinión pública a medida que se difundía por los

medios de comunicación masivos. Desde su inicio mismo se evidenció la polarización entre los partidos supuestamente "extremos:" ARENA y PDC; sin que los intentos de AD y del PCN, ya fueran en el sentido de inducir alguna racionalidad, ya fueran para mostrarse como las soluciones moderadas frente a ambas "extremas," lograran causar mayor impacto; nada se diga del resto de partidos minoritarios.

La manipulación de los contenidos ideológicos hecha por los distintos partidos consiguió crear una presión adicional para la participación masiva en emitir el voto. Los elementos intimidatorios para marzo y mayo de 1984 fueron de proporción y naturaleza distintas a las de 1982 (sin contar la campaña de multa a los no votantes, o el posible incumplimiento de colaboración con la izquierda). En este proceso las presiones sobre el electorado se matizaron con las opciones políticas que cada partido representaba: ARENA manejó durante toda su campaña el tema de que si triunfara la DC, los propietarios se verían dañados en sus intereses por las reformas y expropiaciones que implementaría el "comunitarismo" de Duarte; por su parte, el PDC insistió en que el arribo al poder de ARENA y su candidato D'Aubuisson, representaba un ascenso de nazifascismo y que, consecuentemente, de su gestión sólo habría que esperar más violencia y represión. Ya la campaña misma, en sus contenidos y forma, insultos, calumnias, utilización de testimonios falsos (como el del supuesto asesino de Mons. Romero), fueron de tal calibre que reflejaron la situación de violencia y anomía del país y confirmaron que las elecciones no eran el problema fundamental.

Tal manipulación de la campaña indujo a una votación masiva, en la cual se computaron como votos válidos un total de 1.266.276 en la primera vuelta (*La Prensa Gráfica*, 2 de abril de 1984, 72) —sin contar los supuestos 500.000 que se dijo no pudieron votar (20%) en ninguna de las urnas, más los impedidos por los insurgentes y los inhabilitados de que ya se habló—, y un total de 1.404.366 votos válidos en la segunda vuelta (752,615 PDC y 651,741 ARENA; cfr. *La Prensa Gráfica*, 12 de mayo de 1984, 25). La afluencia masiva, por simple observación comparativa, muy superior a la de 1982, habla claramente del fraude inflacionario desmesurado de aquella fecha, que todos los partidos han ido reconociendo uno tras otro. ARENA logró en la primera vuelta tan alto porcentaje (29.76%) no

sólo por el tipo de campaña, sino también por la presión sobre los trabajadores de café, como se pudo comprobar en ciertos municipios de La Libertad y Ahuachapán, así como capitalizando a su favor la situación imperante en los departamentos de mayor conflictividad; mientras que el PDC obtenía su amplia aunque insuficiente base social (43.41%) no sólo por su campaña, sino que en gran parte debido al respaldo otorgado por la UPD tras la consolidación del "pacto social"; el PCN recuperó parte de sus antiguas bases, rescatando votos de personas que optaron por la "moderación" alternativa, y logró así un 19.31 por ciento de los votos válidos; el resto de partidos mostró su irrelevancia en una polarización como la salvadoreña, desenmascarando sobre todo la carencia absoluta de base social para PAISA. Sería interesante conocer que porcentaje de votos nulos o en blanco expresaban algún tipo de opción por la izquierda, así como la proporción exacta de posibles votantes de zonas controladas o imposibilitadas de votar, más los emigrantes políticos, desplazados, etc., para vislumbrar el posible apoyo político de dicha fuerza incluso en condiciones tan contrarias a su manifestación democrática.

Las elecciones mismas y el marco en que se desarrollaron, fueron delimitadas y determinadas por la administración Reagan, que las necesitaba para su campaña de reelección, por eso logró que el gobierno salvadoreño las propusiera para diciembre de 1983 (como se le comunicó públicamente el presidente Magaña al Papa Juan Pablo II en su visita a El Salvador), pero la imposibilitada práctica obligó a postergarlas hasta marzo de 1984, aunque no se dieran las condiciones sociales, jurídicas (constitución, ley electoral) ni logísticas operacionales para que fueran medianamente aceptables. Esto confirma que el objetivo político no era la democracia, sino la utilización de la votación masiva para otros fines. En este contexto encaja correctamente la exclusión del FDR-FMLN, ya que las elecciones mismas han sido concebidas como arma política para intensificar la solución militar norteamericana en El Salvador. Las mismas declaraciones públicas de la más alta dirigencia político-militar del FDR-FMLN no fueron tomadas como dignas de crédito. La administración Reagan capitalizó las acciones militares rutinarias de la guerrilla, así como las supuestas del MOR (grupo minoritario y cismático de las FPL) para intensificar la guerra y la presión por ayuda militar adicional de

emergencia, para que supuestamente se pudieran llevar a cabo las elecciones. Tampoco fueron óbices la escasez de tiempo, los defectos del registro electoral, la carencia de dinero en el CCE, la falta de información indispensable, los descontroles de todo tipo que se evidenciaron el 25 de marzo, la renuncia al CCE de parte del candidato por ARENA, así como las denuncias de anomalías de los dimisionarios (primero el Dr. Hasbún, asesinado en forma no aclarada días más tarde, y luego el Dr. Posada), o la festinada y no explicada renuncia, justo la víspera de la votación, del ingeniero programador de la computadora. El objetivo, claramente, no era el obtener un proceso democrático racional y limpio, sino lograr un arma política alternativa a la oferta de diálogo y negociación, de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. En ese sentido se comprende la ausencia absoluta de cualquier voz —ya no se diga campaña— a favor de la abstención, tanto más cuanto que los medios de comunicación de que dispone la guerrilla han demostrado su escasa accesibilidad al público.

La insistencia de la administración Reagan

en llevar a término dicho evento electoral obedece a las esperadas ganancias que aporta: 1) el manejo publicitario nacional e internacional del carácter masivo del sufragio como un factor que ratifica la marcha de El Salvador por la vía democrática, lo cual a su vez, permitirá menores obstáculos en las aprobaciones de ayuda económica y militar de parte del Congreso; 2) las elecciones han propiciado un potencial espacio político a los distintos partidos, como prueba del pluralismo ideológico avalado por la administración Reagan; 3) el pueblo ha escogido un partido moderado y reformista para solucionar los graves problemas del país —por lo cual tendrían cierto peso las acusaciones de que se apoyó a Duarte y se presionó para vetar la resolución de la asamblea de eliminación de listados en la segunda vuelta, como luego se indicará; y 4) como consecuencia de lo anterior, la administración norteamericana espera lograr un mayor aislamiento político a las fuerzas que sustentan el FDR-FMLN y, consiguientemente, un mayor apoyo, tácito o expreso, a su postura militar y política hacia El Salvador y Centroamérica.



Las mayorías desposeídas acudieron a las urnas por muy distintas razones y motivaciones, pero una vez cumplido ese deber, el resultado de las elecciones les interesa menos que su angustioso presente.



Las elecciones, lejos de tener un ambiente político favorable y de ser un mecanismo institucional para resolver las disputas por el poder han sido un problema mal planteado.

4. La administración Reagan y la implementación de la estrategia militar como alternativa de "solución" al conflicto salvadoreño

El continuo y progresivo apoyo que la administración Reagan ha dado a los regímenes políticos de El Salvador desde 1981 frente a la oposición político-militar del FDR-FMLN, ha estado inspirado en la perspectiva norteamericana de visualizar en la guerra una "solución" al conflicto salvadoreño.

La estrategia de Estados Unidos ha partido de la consideración de que dicho conflicto no es más que la expresión de la pugna entre el este y el oeste, manifestada en una zona (Centroamérica y el Caribe) donde se ven amenazados los intereses de la seguridad nacional norteamericana. En dicho diagnóstico el peso de los factores sociales, económicos y políticos son secundarios respecto al papel que juegan los agentes del imperialismo soviético en las expresiones orgánicas de la izquierda, o ya están superados por las reformas estructurales implementadas por el régimen de 1980 y sus sucesores. En tal diagnóstico únicamente faltaba depurar los elementos que pudieran abonar la tesis de una frustración política derivada de los fraudes electorales del pasado. Así es como sur-

gió la necesidad de implementar procesos electorales que restauraron la credibilidad de la ciudadanía salvadoreña y de la opinión pública norteamericana e internacional, ofreciendo la oportunidad histórica de una marcha de El Salvador por la vía democrática, como rechazo a la izquierda y como alternativa a la guerra civil; es decir, el proceso electoral estaba concedido como una estrategia política subsidiaria a la intensificación de la solución militar.

Frente al crecimiento sostenido de la beligerancia armada de la izquierda, la solución militar, respuesta estratégica dada por el gobierno norteamericano, se ha puesto en evidencia en un incremento de la presencia militar norteamericana en el país y en sus proximidades. Según funcionarios norteamericanos, la mayor presencia militar de su país en la zona obedece a la necesidad de montar un escudo protector en favor de las elecciones salvadoreñas de 1984 y también al acomodo de fuerzas estratégicas en la zona que contengan un virtual triunfo de la guerrilla en El Salvador. Dicho escudo se compone de 1) el envío de aviones de observación (OV-1) con base en Honduras, desde donde pilotos norteamericanos hacen misiones de reconocimiento para monitorar movimientos guerrilleros y alertar a las

tropas gubernamentales; 2) el estacionamiento de 1.700 soldados norteamericanos en Honduras para cuidar el equipo militar utilizado en los ejercicios conjuntos, preparar los que se iniciaran en los próximos meses (Granadero I), y también para disuadir actividades guerrilleras de gran escala en torno a las elecciones; 3) la utilización de una regulación poco conocida, que permite al presidente Reagan enviar ayuda militar de emergencia a El Salvador y 4) el envío de grupos de combate navales que acompañan a dos portaviones estacionados en las costas del Pacífico y Caribe de Centroamérica, para llevar a cabo maniobras (ECA, 1984, 425, 143).

La insistencia de la administración Reagan en mantener una estrategia militar como solución al conflicto salvadoreño la ha llevado a reiteradas oposiciones de parte de miembros del Congreso. La última de ellas, que gravita sobre la problemática electoral de El Salvador, se inició primero con la pretensión del presidente Reagan de obtener la aprobación de la suma de 93 millones de dólares en concepto de ayuda militar complementaria y de emergencia para las fuerzas armadas salvadoreñas; esta cifra fue reducida por la oposición senatorial a 63 millones como base de discusión, a la cual la fracción demócrata intentó rebajar a únicamente 25 millones. Esto ha sido señalado por algunos parlamentarios de maniobra que perseguía dejar las decisiones de fondo hasta después de la segunda vuelta electoral en El Salvador (*La Prensa Gráfica*, 4 de abril de 1984, 5), como de hecho lo consiguió el Congreso.

Mientras se preparaba el evento electoral, el conflicto político-militar en El Salvador continuaba su marcha en la profundización y en el incremento de sus costos económicos y sociales. Dado que el objetivo principal de la estrategia norteamericana y gubernamental es la derrota militar del FMLN, los mecanismos e instrumentos militares han recibido la mayor importancia y prioridad. Por ello se ha observado en el período inmediato anterior una militarización mayor a través de las siguientes evidencias: 1) creciente dotación de implementos bélicos al ejército salvadoreño y aumento en el número total de efectivos (a comienzos de 1984 ascendían a 40.000); 2) tecnificación de las fuerzas regulares del ejército salvadoreño por medio de programas de entrenamiento en Estados Unidos, Panamá, Honduras y El Salvador, logrando formar cuatro batallones de reacción inmediata y trece batallones livianos

(ECA, 1984, 425, 157); modificaciones estratégicas y tácticas que definen la línea de guerra de contención, corte de rutas de abastecimientos, utilizando para ello unidades móviles que usan tácticas de guerrilla. Todas estas modificaciones preparan al resto del ejército para que asuma una táctica de defensa de posiciones en la mayor parte de los centros urbanos donde se realizaron las elecciones.

Por su parte, el FMLN, no obstante que con sus declaraciones le atribuye gran importancia a la solución política del conflicto, hace de la lucha armada su principal instrumento, por lo que ha entrado en un acelerado proceso de militarización, buscando la articulación de verdaderos ejércitos que puedan ejecutar acciones frontales contra el ejército regular; a la par de eso, ha desarrollado otros intentos en el terreno político como son la reactivación de las masas, la ampliación de sus alianzas y la propuesta de un proceso de diálogo y negociación. En tales circunstancias, el FDR-FMLN afronta las elecciones de 1984 sin una línea clara y específica de oposición absoluta a dicho evento.

La consideración de estos aspectos lleva a reconocer la profundización de la guerra y la invariabilidad en el equilibrio de las fuerzas contendientes en el campo de batalla, a la par que se observa una elevación continua de los costos sociales del conflicto. Las operaciones de guerra, tanto las emprendidas por el ejército como las del FMLN, se ponen a la orden del día en las vísperas y durante las elecciones —en ambas vueltas—, sin que ellas agreguen ventaja alguna o superioridad para ninguno de los dos bandos. Por su parte, Estados Unidos inició antes de la segunda vuelta las operaciones, Granadero I junto a la frontera de Honduras con El Salvador y “guardianes del golfo” en la que barcos de guerra norteamericanos junto con patrulleras hondureñas y salvadoreñas realizaron maniobras en el Golfo de Fonseca hasta el día 7 de mayo. El evento electoral, pues, se desarrolló en el contexto de una guerra civil y de amenaza de intervención, excluyendo del mismo a una de las fuerzas sociales, políticas y militares que se encuentran determinando la situación bélica del país.

El gobierno norteamericano ha hecho redoblados esfuerzos para controlar y supervisar las elecciones de El Salvador, bien sea por la concesión generosa de ayuda económica específica para el evento, bien sea por la asistencia técnica,

bien por la presión ejercida sobre algunas ideologías y candidatos, la negación de visado a D'Aubuisson para visitar Estados Unidos, así como la intensa campaña contra los escuadrones de la muerte justo en vísperas de las elecciones, y la denuncia del senador Jesse Helms de que la embajada norteamericana y la CIA habían ayudado y presionado para conseguir el veto presidencial a la decisión de la asamblea de eliminar los listados para la segunda ronda y para el triunfo impuesto de Duarte —muy débilmente desvirtuada por el Departamento de Estado. Todos estos son claros signos de presión y preferencias. La embajada de Estados Unidos en San Salvador ha ido elevando progresivamente el número de miembros de su sección política hasta alcanzar la cifra de 26, la máxima en cualquier legación en todo el mundo. Pero el colmo de la demostración del poder supremo y absoluto sobre el proceso electoral salvadoreño y sobre su vida política se alcanzó cuando el embajador Pickering fue el primero en aparecer ante las cámaras de televisión y los medios nacionales e internacionales de comunicación, la noche del 25 de marzo para hacer las primeras declaraciones e interpretaciones de las elecciones.

Las declaraciones del presidente Reagan sobre el evento electoral también permiten confirmar la tesis de la utilidad del proceso mismo

para su política belicista en El Salvador, a tal punto que únicamente se consideraron las ganancias políticas del evento, sin entrar a mayores consideraciones sobre las pérdidas ni sobre las frustraciones que se originaron del mal manejo del suceso o de la incertidumbre de los resultados de la segunda vuelta. Por eso, al evaluar los resultados, las frases pronunciadas por Reagan reflejan un sentido de prefabricado beneficio, calificando las elecciones como una “victoria de la libertad sobre la tiranía, de la libertad sobre la represión, y del valor sobre la intimidación;” tras la segunda vuelta dijo, “un grato avance que fortalece su solicitud de ulterior ayuda para el gobierno de esa nación.” El presidente prometió hablar a toda la nación el miércoles 9 de mayo sobre la crisis en Centroamérica y la política de su gobierno para la región. Después del discurso obtuvo, el día 10, una ajustada victoria (212 contra 208) al conseguir la asignación de ayuda militar a la región en los dos siguientes ejercicios fiscales (*El Diario de Hoy*, 8 de mayo de 1984; 10 y 11 de mayo). Opiniones similares a las de Reagan fueron vertidas festinadamente por los observadores oficiales enviados por la administración norteamericana a la primera vuelta, entre ellos el senador republicano William Roth, quien se pronunció sobre los comicios como “verdaderamente otro paso hacia el proceso democrático”



El evento electoral se desarrolló en el contexto de una guerra civil y de amenaza de intervención norteamericana, excluyendo a una de las fuerzas sociales que determinan la situación militar del país.

(*La Prensa Gráfica*, 28 de marzo de 1984). Como se puede apreciar, tales opiniones se colocan al margen de los acontecimientos que afectan al proceso electoral, como la situación de guerra civil, el estado de sitio permanente, la exclusión de organizaciones políticas cuyas ideologías estén fuera del rango permitido por el gobierno de Estados Unidos y ni siquiera hacen referencia a la desorganización casi caótica del evento mismo en la primera ronda, la multiplicidad de oportunidades de fraude y la subsiguiente frustración reiterativa de un buen número de electores, o a los reclamos de fraude en el conteo de la segunda vuelta y la impugnación que hiciera ARENA, o incluso al estrecho margen del PDC sobre ARENA.

Conclusión

Las condiciones económicas, sociales y políticas en las que está organizado el país, aparte de no ser no ya las óptimas, pero ni siquiera las mínimas requeridas para la posibilidad de un proceso electoral como vía de aproximación a la democracia, sustentaban consistentemente las hipótesis de que las elecciones no resolverían nada ni podían lograr un éxito mínimamente aceptable y de que respondían no a la realidad y necesidades de El Salvador, sino a los intereses concretos de Estados Unidos y de la política de la administración Reagan para el país y la región, la guerra. Las elecciones sólo son parte subordinada de ella.

Las experiencias de los comicios ha confirmado lamentablemente tales hipótesis, aun prescindiendo de las limitaciones atribuibles a inexperiencias o incapacidad de conducción del pro-

ceso, así como del resultado del mismo. Y no ya porque en la primera vuelta no se hubiese dilucidado la contienda política, o porque en la segunda la victoria fuera por muy estrecho margen e impugnada, sino porque en todo el proceso no se han abordado los problemas cruciales de El Salvador ni se les han buscado soluciones operativas, bien sea para la guerra, la crisis económica, la desintegración social, la violación continua y sistemática de los derechos humanos, o la dignidad y soberanía nacionales y el justo orden jurídico y constitucional.

Duarte asumirá el control de una cuota infima de poder, restringido por la Constitución en la aplicación de la segunda fase de la reforma agraria, obstaculizado por la empresa privada que se alineó detrás de ARENA, respaldado por una minoría en la asamblea hasta las próximas elecciones, urgido por las fuerzas laborales a otorgar mayores prestaciones salariales y socio-políticas, hostigado por un FDR-FMLN que no le dará tregua, contrapesado por una institución armada consciente de su poder y su protagonismo en el acontecimiento primario que es la guerra y subordinado a los intereses e indicaciones explícitas de la administración norteamericana que tiene en sus manos el contundente argumento de la indispensable ayuda económica y militar. Frente a tales limitaciones, la escasa mayoría de votos obtenida el 6 de mayo y la base social que representa mayoritariamente la UPD no auguran más que un gobierno débil apuntalando su estabilidad en alianzas coyunturales.

San Salvador, 14 de mayo de 1984.